

RUMANÍA

COMENTARIO GENERAL

La paulatina desindustrialización producida durante la transición rumana ha dejado enterrados en el olvido los yacimientos del subsuelo que vuelven ahora a despertar pasiones. Como el Estado no tiene fondos, maquinaria ni especialistas capaces de explotar los recursos subterráneos, ha optado por concederlos a inversores extranjeros. El problema es que los métodos de las empresas extranjeras suelen entrar en colisión bien con los intereses de las comunidades locales, o bien con las sensibilidades ecologistas. El resultado es que ahora proyectos importantes de explotación están siendo aplazados, bloqueados o cancelados.

A finales de mes, la empresa estadounidense Chevron suspendió temporalmente su actividad en el pueblo de Pungești, en la provincia de Vaslui (al este del país), después de cuatro días de protestas de los habitantes contra la explotación del gas de esquisto de la zona. Los consejeros locales han votado por unanimidad la convocatoria, el próximo mes, de un referéndum local en que los vecinos de esta pequeña localidad se pronuncien sobre si quieren explotaciones de gas de esquisto en su pueblo.

Hay estudios especializados en que se afirma que el gas de esquisto del subsuelo de Rumanía podría asegurar la independencia energética del país durante un siglo. No obstante, la contaminación grave e incluso la producción de pequeños terremotos son los efectos colaterales de estos métodos de explotación, advierten otros especialistas.

Entre las ventajas económicas y los peligros ecológicos, las autoridades se ven obligadas a hacer arriesgados ejercicios de equilibrio. El primer ministro Victor Ponta ha afirmado que las protestas de los últimos días no le hacen cambiar de posición. Rumanía debe conseguir la independencia energética, aunque afecte a intereses ajenos. “Veo mucha desinformación sobre este tema”, ha declarado. “Es evidente que detrás de esta desinformación hay una verdadera campaña instrumentada por los que no tienen ningún interés en que seamos un país independiente, un país que cuente con posibilidades de desarrollo, por los que no quieren que Rumanía tenga industria. Creo que se trata de intereses privados contrarios al interés general del país.”

Esta declaración es una alusión transparente, dicen los comentaristas, a la empresa rusa Gazprom. Obviamente, dicha empresa está interesada en mantener su cuasi-monopolio sobre el abastecimiento de gas de Europa y hay quienes afirman que financia las campañas de prensa y las manifestaciones callejeras contra la explotación del gas de esquisto.

Por otra parte, el Gobierno de Bucarest se vio obligado a dar un paso atrás en el proyecto de explotación del oro y la plata de Roșia Montană, en la provincia de Alba (centro del país). El borrador de ley que el Ejecutivo dedicó exclusivamente a estos yacimientos concesionados a la empresa canadiense Gabriel Resources, fue enmendado sustancialmente por la Comisión parlamentaria especial.

El mes pasado, el Parlamento rumano creó una Comisión con el fin de analizar el proyecto legislativo sobre la explotación del yacimiento de oro de Roșia Montană, en el centro del país. Se trata de una de las explotaciones más controvertidas y el motivo es el impacto que la extracción con cianuro tendrá sobre el medio ambiente. De hecho, esta es la razón principal por la cual la explotación de la mina por parte de la compañía canadiense Gold Corporation ha sido bloqueada desde hace años por las autoridades rumanas, que no han dado las aprobaciones de medio ambiente.

En un intento por establecer la verdad y mediar entre los partidarios y los opositores del proyecto, la Comisión parlamentaria ha efectuado una serie de comparecencias en las que han participado varios expertos en medio ambiente, geología, minería, cultura y economía. A partir de hoy, la Comisión debatirá cada artículo del proyecto de ley sobre Roşia Montană en el Parlamento, un documento final destinado a regular la explotación aurífera en los Cárpatos Occidentales. Este martes, la Comisión ha escuchado por segunda vez al ministro de Grandes Proyectos de Infraestructura, Dan Şova, que contestó a varias preguntas, desde el cumplimiento de la legislación para la protección del medio ambiente y la conservación del patrimonio arqueológico hasta incluso la regulación de las expropiaciones en esta zona.

Şova ha presentado las ventajas económicas del nuevo proyecto de Roşia Montană en comparación con el antiguo proyecto y ha asegurado que el Estado rumano vigilará la explotación aurífera. Sin embargo, el ex ministro de medio ambiente representante de la Unión Demócrata de los Húngaros de Rumanía, Attila Korodi, ha advertido que el Gobierno no dispone de datos seguros, sino solo de los aportados por Roşia Montană Gold Corporation. Korodi ha destacado que, a pesar de lo que dice la compañía canadiense, el método de explotación con cianuro ya no se utiliza en ninguna parte de Europa. A su vez, el senador del Partido Nacional Liberal, Dumitru Popescu Dian, cuyo partido rechazaba el proyecto de ley a pesar de ser este último la creación del Ejecutivo del cual forma parte, reprocha al Gobierno el hecho de que este proyecto permita a una compañía privada hacer expropiaciones. Según su opinión, se crearía así un precedente peligroso.

El ministro Şova ha replicado que las expropiaciones se harán solo por decisión del Gobierno y que el motivo por el cual se le ha permitido a la compañía privada hacer expropiaciones es que esta última es más eficaz en este asunto en comparación con la Administración pública. Şova además ha dicho que la compañía no adoptará ninguna decisión sin el acuerdo de la parte rumana y que no hay ningún riesgo de pérdidas económicas. Dentro de unos días, se espera que se finalice el informe de la Comisión especial, que posteriormente será presentado ante el Parlamento de Bucarest.

La privatización de algunas compañías estatales figura entre los compromisos asumidos por Rumanía ante los inversores internacionales con los que, después de 2009, ha firmado tres acuerdos financieros. Pero, a pesar de los esfuerzos hechos por encontrar al inversor adecuado, las tentativas han fracasado. En verano de 2012, la privatización de una de las plantas químicas más importantes del sur de Rumanía, Oltchim Ramnicu-Valcea, fracasó. La subasta organizada para la compra del paquete mayoritario de acciones la ganó Dan Diaconescu, líder de un partido populista y dueño de un canal de televisión. Sin embargo, Diaconescu no tomó posesión de las acciones, dado que no pudo pagar al Estado los 45 millones de euros que prometió pagar por las acciones y la subasta fue cancelada. Debido a las grandes deudas, la planta se declaró insolvente y ahora la situación es incierta. Los administradores judiciales de la compañía afirman que Oltchim registró el pasado mes de septiembre los mejores resultados de este año, duplicándose la cifra de negocios a 11,43 millones de euros, en comparación al mismo período del pasado año. Sin embargo, la situación sigue siendo complicada, ya que a esto se le une también el fracaso de la venta Ramplast, empresa que produce perfiles de PVC.

En este contexto, el ministro de Economía, Andrei Gerea, solicita encontrar urgentemente un inversor fuerte para Oltchim que registre una cifra de negocios anual de mil millones de euros. Tampoco la privatización de CFR Mercancías – otro compromiso asumido por el estado - pudo finalizarse hasta el pasado 18 de octubre, plazo límite tras la subasta ganada por el Grupo Ferroviario Rumano (GFR).

En septiembre pasado, el Ministerio de Transportes de Bucarest firmó el contrato de privatización con GFR, por el cual prometió pagar 202 millones de euros por el paquete del 51% de acciones y realizar inversiones de unos 204 millones de euros. Pero, el GFR no pagó la diferencia de 170 millones de euros porque algunos bancos acreedores de CFR Mercancías no aprobaron el acuerdo que prevé cambiar a los accionistas y el Consejo de la Competencia no tuvo tiempo para pronunciarse sobre la transacción.

El Fondo Monetario Internacional, presente estos días en Bucarest para evaluar el acuerdo *stand-by* firmado el pasado mes de septiembre, ha transmitido claramente al Gobierno que lo mejor sería rehacer el procedimiento de privatización de la compañía CFR Mercancías en vez de seguir el procedimiento actual. La titular de Transportes, Ramona Manescu, afirma que el calendario para la privatización ha sido establecido y la fecha de la subasta será acordada con el FMI. Las autoridades rumanas esperan que el proceso finalice antes del próximo verano.

A primeros de octubre el Consejo Nacional Tripartito se reunió en Bucarest para reanudar el diálogo social entre el gobierno, los sindicatos y las patronales. Las partes no llegaron a ningún acuerdo, al menos en cuanto a la introducción de una moratoria sobre la legislación del trabajo, algo propuesto por el Ejecutivo. Aceptada por las confederaciones patronales, la propuesta ha sido rechazada por los sindicatos decepcionados por la falta de comunicación en materia del mercado laboral. Los líderes sindicales han argumentado que es difícil introducir una moratoria si no hay un pequeño cambio en el marco legislativo que permita el inicio de algunos debates más amplios sobre las modificaciones legislativas en el campo del mercado laboral.

Entre los cambios que hay que abordar en esta legislación según los sindicatos estaría la problemática de la representatividad de los socios en la estructura de los convenios colectivos de trabajo. Al mismo tiempo, los sindicatos consideran que debería volverse a introducir el convenio nacional, dado que este tipo de documento puede proteger de manera eficaz los intereses de los asalariados rumanos. Asimismo, los sindicatos piensan que debería cambiarse la regulación que limita el derecho al conflicto laboral y han solicitado un crecimiento gradual del sueldo mínimo. El líder de Cartel Alfa, Bogdan Hossu ha declarado haber «presentado al Gobierno un proyecto de acuerdo social que prevé un crecimiento rítmico del salario mínimo para que en 2016 la diferencia entre el sueldo mínimo y el salario medio sea del 50%. Otros cambios se refieren al derecho al conflicto de trabajo, limitado ahora por la ley y el convenio colectivo único a nivel nacional».

Por su parte, las patronales opinan que un crecimiento del sueldo mínimo es necesario pero no saben si pueden aplicar las medidas solicitadas por los sindicatos.

Según el vicepresidente de la Alianza de las Confederaciones Patronales, Dan Matei Agathon, «hay que analizar en las unidades que forman parte de nuestras confederaciones cuánto podemos permitirnos aumentar el salario mínimo. Al mismo tiempo, el sueldo mínimo debe ser incrementado para poner fin a los pagos ilegales».

Por otra parte, las ocho confederaciones patronales representativas nacionales no están de acuerdo con la reintroducción del convenio colectivo en este ámbito. Argumentan que este tipo de documento no existe en la mayoría de los países de la UE, sólo Bélgica lo tiene, y por tanto Rumanía estaría en desventaja en comparación con los demás países miembros. También en la reunión del pasado miércoles, los participantes decidieron organizar un grupo de trabajo cuyo objetivo sería estabilizar los puestos de trabajo existentes y crear nuevos empleos.